

DOSIER LEGISLATIVO DEL REAL DECRETO-LEY 19/2020, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA AGRARIA, CIENTÍFICA, ECONÓMICA, DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Y TRIBUTARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19

[Medidas en el ámbito de empleo y Seguridad Social.](#)
[Medidas en el ámbito tributario.](#)

El [BOE del 26 de mayo de 2020](#) ha publicado el [Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo](#), por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, que entra en vigor al día siguiente de su publicación.

La situación epidemiológica que ha generado una crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19 en España ha obligado a adoptar medidas de salud pública que han alterado la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y productivas. En particular, puede destacarse cómo la suspensión de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al desempeño de otras muchas han generado un importante aumento del desempleo coyuntural y una reducción de actividad de pymes y autónomos.

Por ese motivo, se han ido aprobando una serie de medidas para paliar sus efectos, que ahora se vienen a completar por medio de este real decreto-ley en los ámbitos agrario, científico, económico, laboral y de la Seguridad Social y tributario.

A continuación, nos centraremos en explicar en qué consisten las medidas laborales y de la Seguridad Social y las medidas tributarias.

Medidas en el ámbito de empleo y Seguridad Social

Por su parte, destacan las medidas que proceden:

Cese de actividad y exoneraciones: Se precisan los artículos [17](#) y [24](#) del [Real Decreto-ley 8/2020](#), con la finalidad, de esclarecer por un lado, aquellos aspectos presupuestarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad y, a su vez, el régimen aplicable a las exoneraciones, subrayando la imposibilidad de aplicar exoneraciones en las cotizaciones de empresas sometidas a “ERTEs” vinculados al COVID-19 sin cumplir el requisito de suministro por medios electrónicos de los datos relativos a inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, así como los referidos a la cotización y recaudación.

Prestación por desempleo de los artistas en espectáculos públicos: Se ajusta la prestación por desempleo de los artistas en espectáculos públicos prevista en el [artículo 2](#) del [Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo](#). Sin otra finalidad que aclarar que es el propio acceso extraordinario a la prestación el que

responde a esta crisis sanitaria, sin que corresponda a los artistas acreditar que su situación concreta de falta de actividad deriva de la misma. Del mismo modo, se elimina el requisito de encontrarse en el periodo de inactividad voluntaria, suprimiendo el coste que ello supondría para el trabajador y simplificando la tramitación y reconocimiento de la prestación. Aunado a esto, preservando la seguridad jurídica, es posible suspender el cobro de la prestación, para realizar trabajos por cuenta propia o ajena, y reanudarlos posteriormente.

Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios: Se modifica el [texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social](#), recuperando la mención literal a que en el caso de las explotaciones con más de un titular se pueda contratar proporcionalmente a más trabajadores a fin de quedar incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Favoreciendo que las explotaciones familiares puedan dimensionarse adecuadamente, pues al compartir varios titulares la misma explotación, permite ajustar el número de trabajadores. De forma que además de los dos trabajadores pueda incrementarse en un trabajador más por cada nuevo titular (en la modalidad de bases diarias, 273 horas equivalentes) y evitar que con ello tengan que salir del sistema especial de cotización, pues todos ellos son pequeños agricultores.

Formulación y rendición de cuentas anuales para las mutuas: Se rectifica el [artículo 48.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo](#), de medidas urgentes complementarias, con el objeto de que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se someten al mismo régimen que las entidades de Derecho Público pertenecientes al sector público estatal, en lo relativo al régimen aplicable a la formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019.

Medidas urgentes en materia de empleo agrario: Se enmienda el [artículo 3 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril](#), por el que se adoptan medidas urgentes en materia de empleo agrario, con el fin de realizar una precisión terminológica, y el [Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo](#), de medidas sociales en defensa del empleo, para bien de incorporar las necesarias referencias al Instituto Social de la Marina. Mismas que están generando inseguridad jurídica en los interesados de dicho instituto.

En aras de la inseguridad jurídica creada y dado que la competencia para la gestión de las prestaciones de desempleo en relación con los trabajadores y empresas incluidos en el Régimen Especial del Mar es del Instituto Social de la Marina, se incorpora en el texto, dos referencias al Instituto Social de la Marina para reflejar sus competencias.

Silencio administrativo del FOGASA: Se añade una regulación concreta sobre el silencio administrativo en los procedimientos de garantía salarial previstos en el [artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores](#). De forma que, señalándose que el plazo de tramitación sea de tres meses, se dispone el silencio administrativo estimativo para supuestos en que no se hubiera resuelto en plazo, limitándose al reconocimiento de las obligaciones en favor de personas que puedan ser legalmente beneficiarias de esa prestación y por la cuantía que resulte por aplicación de los límites previstos en dicho artículo. Y ello para evitar que

personas que en ningún caso puedan ser beneficiarias obtengan este tipo de prestaciones y también evitar que los solicitantes puedan percibir cantidades por encima de los límites máximos previstos en la ley.

Reconocimiento como accidente de trabajo de las prestaciones de Seguridad Social: aquel que cause el personal de centros sanitarios o socio-sanitarios, y que en el ejercicio de su profesión, hayan contraído COVID-19 durante cualquiera de las fases de la pandemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios.

Mantenimiento del empleo de jóvenes extranjeros: Por otro lado, el citado [Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril](#), avala de forma automática el derecho a trabajar a aquellos jóvenes extranjeros cuyo estatuto regular en el país no lleva aparejado este. Estos jóvenes están contribuyendo, con su trabajo, al sostenimiento de un sector esencial durante la crisis del COVID-19. Además, con base en este real decreto-ley, muchos de ellos están teniendo una primera oportunidad laboral que contribuye, de forma clave, en la inclusión de estos jóvenes, especialmente, de aquellos respecto a los que un servicio de protección de menores hubiese ostentado su tutela legal, custodia, protección provisional o guarda durante su minoría de edad.

Por eso, es menester arbitrar una vía que permita a estos jóvenes mantener su derecho al trabajo, tras la finalización de la vigencia del real decreto-ley del sector agrario. A tal fin, la disposición adicional segunda de este Real Decreto-ley introduce una vía específica que les permitirá, cuando hayan sido contratados en el sector agrario con base en el [artículo 2.1.d\)](#) del meritado [Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril](#), y tras la finalización de su vigencia, acceder a una autorización de residencia y trabajo, válida en todo el territorio nacional y sin límites sectoriales o de actividad y sin aplicación de la situación nacional de empleo. Esta autorización tendrá una vigencia de dos años, renovable por otros dos. Todo ello sin perjuicio de que, para el acceso a la residencia de larga duración, se tendrán en cuenta todos los periodos de residencia, legal y continuada, con esta u otras autorizaciones de las que haya sido titular.

Excepción a la limitación del gasto en la Administración del Estado: En la disposición adicional primera se establece de Real Decreto que nos ocupa, se impone como excepción a la limitación del gasto en la Administración del Estado el abono de la cantidad asignada al ejercicio 2020 en el Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de 12 de marzo de 2018.

En el mismo sentido, se contemplan en el contexto actual varias aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.

Medidas en el ámbito tributario

Se entenderán como tales, a los efectos de este RD-ley, las siguientes:

1. Impuesto sobre Sociedades

En el [artículo 12](#) del [Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo](#), se prevén medidas en relación con la presentación de este impuesto para los contribuyentes que se ajusten para la formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio a lo dispuesto en los [artículos 40 y 41](#) del [Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo](#), de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Estos contribuyentes, presentarán la declaración del Impuesto para el período impositivo correspondiente a dicho ejercicio en el plazo previsto en el [apartado 1](#) del [artículo 124](#) de la [Ley 27/2014, de 27 de noviembre](#), del Impuesto sobre Sociedades. (25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo).

Si a la finalización de este último plazo, las cuentas anuales no hubieran sido aprobadas por el órgano correspondiente, la declaración se realizará con las cuentas anuales disponibles.

A estos efectos, se entenderá por cuentas anuales disponibles:

- a. Para las sociedades anónimas cotizadas, las cuentas anuales auditadas a que se refiere la letra a) del [apartado 1](#) del [artículo 41](#) del mencionado [Real Decreto-ley 8/2020](#).
- b. Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el [Código de Comercio](#) o con lo establecido en las normas por las que se rijan.

En el caso de que la autoliquidación del Impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas anuales aprobadas por el órgano correspondiente difiera de la presentada con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, los contribuyentes presentarán una nueva autoliquidación con plazo hasta el 30 de noviembre de 2020.

- a. La nueva autoliquidación tendrá la consideración de complementaria a los efectos previstos en el [artículo 122](#) de la [Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria](#), si de ella resultase una cantidad a ingresar superior o una cantidad a devolver inferior a la derivada de la autoliquidación anterior efectuada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.

La cantidad a ingresar resultante devengará intereses de demora conforme a lo dispuesto en el [artículo 26](#) de la [Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria](#), desde el día siguiente a la finalización del plazo previsto en el [apartado 1](#) del [artículo 124](#) de la [Ley 27/2014, de 27 de noviembre](#), del Impuesto sobre Sociedades, sin que le resulte de aplicación lo dispuesto en el [artículo 27](#) de la [Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria](#).

- b. En los casos no comprendidos en la letra anterior, la nueva autoliquidación producirá efectos desde su presentación, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el [apartado 3](#) del [artículo 120](#) de la [Ley 58/2003, de 17 de diciembre](#),

General Tributaria, y en los [artículos 126](#) y siguientes del [Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria](#) y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por [Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio](#), ni se limiten las facultades de la Administración para verificar o comprobar la primera y la nueva autoliquidación.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, no resultará de aplicación respecto de la nueva autoliquidación las limitaciones a la rectificación de las opciones a que se refiere el [apartado 3](#) del artículo [119](#) de la [Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria](#).

En el caso de devolución de cantidades derivadas de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se aplicará el [artículo 127](#) de la [Ley 27/2014, de 27 de noviembre](#), del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos el plazo de los 6 meses se contará a partir de la finalización del plazo establecido en el apartado anterior para la presentación de la nueva autoliquidación.

No obstante lo anterior, cuando de la rectificación a la que se refiere la letra b) del apartado anterior resulte una cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso efectivo en la autoliquidación anterior, se devengarán intereses de demora sobre dicha cantidad desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de declaración a que se refiere el [apartado 1](#) del artículo [124](#) de la [Ley 27/2014, de 27 de noviembre](#), del Impuesto sobre Sociedades, hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.

Las autoliquidaciones presentadas por los obligados tributarios a las que se refiere este artículo podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración, que practicará, en su caso, la liquidación que proceda. En particular, no se derivará ningún efecto preclusivo de las rectificaciones a las que se refiere la letra b) del apartado 2 de este artículo.

2. Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias

La publicación a que se refiere el [artículo 95 bis](#) de la [Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria](#), derivada de la concurrencia a fecha 31 de diciembre de 2019 de los requisitos exigidos para la inclusión en aquel, se producirá, en todo caso, antes del 1 de octubre de 2020.

3. Aplazamiento de deudas tributarias y de deudas derivadas de declaraciones aduaneras

Se establece la ampliación del plazo de no devengo de intereses de demora para los aplazamientos previstos en el artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo y del [artículo 52](#) del [Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo](#).

"Las modificaciones del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y del [apartado 6](#) del artículo [52](#)

del [Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo](#), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se aplicarán, respectivamente, a las solicitudes de aplazamiento que se hubieran presentado a partir de la entrada en vigor de dichos Reales Decretos-leyes 7/2020, de 12 de marzo, y 11/2020, de 31 de marzo".

- Se modifica el apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, ampliando el plazo en que no se devengarán intereses de demora derivados del aplazamiento de deudas tributarias: Será durante el plazo de los cuatro primeros meses. (pasa de 3 meses a 4 meses).

- Se modifica el [apartado 6](#) del artículo [52](#) del [Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo](#), ampliando el plazo en que no se devengarán intereses de demora derivados del aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras: Será durante el plazo de los cuatro primeros meses. (pasa de 3 meses a 4 meses).

4. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Se añade un nuevo número 29) en el [apartado B\)](#) del artículo [45.I](#) del texto refundido de la [Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados](#), aprobado por el [Real Decreto Legislativo 1/1993](#), de 24 de septiembre, que tendrá la siguiente redacción:

29. Las escrituras de formalización de las moratorias previstas en artículo 13.3 del [Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo](#), de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, así como en el [artículo 24.2](#) del [Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo](#), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y de las moratorias convencionales concedidas al amparo de Acuerdos marco sectoriales adoptados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 previstas en el [artículo 7](#) del [Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo](#).